



Anna Sanchis. *Burbuja inmobiliaria*, 2010. Escayola exaduro, acrílicos e imanes (piezas móviles) sobre plancha de acero, 50 x 50 cm.

EL TERRITORIO VALENCIANO TRAS LA CRISIS

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN CON SENTIDO COMÚN

Joan Romero y Josep Sorribes

Los valencianos debemos ser capaces, como han hecho los pueblos más cultos de Europa, de alcanzar un equilibrio respetuoso entre cultura, historia, tradición, modernidad y competitividad. No es seguro, sin embargo, que hayamos aprendido de los errores y de los excesos cometidos hasta ahora, aunque deberíamos ser capaces de hacer las cosas mucho mejor.

■ APRENDER DE LOS ERRORES

El País Valenciano está sufriendo en estos momentos los efectos de una crisis económica sin precedentes, la primera crisis «global», que tuvo su detonante en una combinación letal entre los excesos de la desregulación del sistema financiero, la flexibilización de la legislación urbanística española y el estallido de una burbuja especulativa en el ámbito inmobiliario norteamericano. Se ha dicho hasta la saciedad que en nuestro caso concreto se superponen tres crisis: la internacional, la española y la valenciana, con rasgos acumulativos pero diferenciados.

Tampoco habrá que insistir en que el País Valenciano ha sido una de las autonomías que más ha sufrido y está sufriendo las consecuencias de la crisis y esto se explica no solo (que también) por la excesiva «especialización relativa» en el sector inmobiliario (favorecida –como en toda España– por el acceso a una financiación barata y sin límites) sino también por la agobiante falta de políticas proactivas y el recurso a un endeudamiento galopante destinado a mantener una política de *grandeur* de discutibles efectos en la tasa de crecimiento económico.

Lo que hay que hacer o habría que hacer con el territorio es casi una evidencia si se identifican los errores y los excesos cometidos, especialmente (aunque el mal viene de más lejos) desde 1998 hasta el estallido de la crisis. Errores y excesos públicos y notorios y, sin embargo, no corregidos a tiempo. Nunca se ha hablado tanto de desgobierno y de corrupción política y administrativa como en la etapa inmediatamente anterior a la crisis. Incluso se ha llegado a hablar de procesos de «captura» de la política y de olocracia. En el ámbito académico se

han escrito ríos de tinta denunciando los males y sus orígenes, el peligroso triunfo de la banalidad. Ha sido un proceso de destrucción en toda regla (incluso dentro de la estricta legalidad, aunque no siempre). Nos hemos dejado llevar por lo que se ha denominado con acierto «capitalismo de casino». Nuestro mayor reto colectivo continúa permaneciendo en el plano de la cultura territorial, social y política. Cuando la cultura entra en quiebra, cuando hay una pobre densidad institucional y social, cuando la democracia es tan reciente y frágil en el subconsciente colectivo, entonces la opacidad y la complicidad permisiva reinan en la toma de decisiones sobre el territorio.

■ UNA GUÍA DE PRINCIPIOS RAZONABLE

Cualquier propuesta sobre las características de un nuevo gobierno del territorio para después de la crisis tiene que ser coherente con una serie de principios generales tan razonables como menospreciados. Principios que pertenecen a cuatro ámbitos básicos: la esfera político-administrativa, la esfera del desarrollo de unas ciudades más sostenibles, la esfera de la transición hacia un nuevo modelo productivo y la esfera de la calidad democrática.

En el primer ámbito de la esfera político-administrativa, se puede establecer la elevada conveniencia de mejorar la gobernanza territorial multinivel. Es decir, fomentar la codecisión, la coordinación y la cooperación entre las diferentes administraciones sin perder nunca de vista que cualquier política territorial es siempre una política horizontal o transversal que requiere el viejo y noble oficio de hablar, dialogar y ponerse de acuerdo.

«SE HA DICHO HASTA LA SACIEDAD QUE EN EL CASO VALENCIANO SE SUPERPONEN TRES CRISIS: LA INTERNACIONAL, LA ESPAÑOLA Y LA VALENCIANA, CON RASGOS ACUMULATIVOS PERO DIFERENCIADOS»





Para superar la actual crisis, es necesario conseguir un mayor nivel de equilibrio en infraestructuras, eliminando obstáculos en el caso de la red viaria y potenciando la inversión ferroviaria, tanto de cercanías como de alta velocidad, finalizando el AVE Alicante-Francia, entre otras actuaciones.

Dentro de este ámbito, es necesario también trabajar en la escala más eficiente de gobierno del territorio, es decir, como las dinámicas territoriales no entienden de fronteras administrativas, habrá que hacer frente, con flexibilidad pero sin reticencias, a la cuestión de «la escala» más eficiente de gobierno del territorio, lo que equivale a impulsar la escala supramunicipal, a pesar de que se aplique la denominada «geometría variable» o, lo que es lo mismo, la posibilidad de que los ámbitos de gestión varíen en función del objeto de la cooperación. Aceptar el principio del gobierno supramunicipal en buena parte de las competencias «locales» (ordenación del territorio, infraestructuras, medio ambiente, ciclo del agua, promoción económica, etc.) supone admitir que hay que revisar el papel de las diputaciones y la posible sustitución de estas entidades por otras formas de gobierno supramunicipal. Por último, la escala supramunicipal obliga a hacer cesiones de competencias tanto de la Generalitat (hacia abajo) como de los ayuntamientos (hacia arriba).

En cuanto al desarrollo de ciudades más sostenibles, este punto implica un compromiso firme de avanzar hacia ciudades («reales» y no administrativas, está claro) que se caracterizan por el uso creciente de tecnologías

productivas limpias, el incremento de la cohesión social, el respeto activo al patrimonio cultural construido y heredado, y por estructuras territoriales más compactas y menos dispersas. Y que todos estos avances, objetivables bajo la forma de sistemas de indicadores, se produzcan de manera simultánea e integrada.

El tercer ámbito que hay que tener en cuenta es la transición hacia un nuevo modelo productivo, porque no hay que olvidar nunca que en una política de salida de la crisis económica que sufrimos, el territorio, lejos de ser una variable pasiva, también cuenta, y mucho, porque está en el origen de numerosas economías de localización, aglomeración y red, y también porque en las políticas microeconómicas de oferta (como por ejemplo el fomento de la innovación y el desarrollo de territorios inteligentes, economías creativas y espacios urbanos de tecnología, talento y tolerancia), las políticas de los gobiernos «subcentrales» (regionales y locales) son determinantes. Además, la inevitable reconversión del sector inmobiliario y la transición del modelo turístico hacia otro más rentable, menos estacional y más respetuoso con el medio ambiente son temas en los que se impone la codecisión y la colaboración de todas las administraciones.



© Ana Ponce & Ivo Rovira

Por último, encontramos la esfera de la calidad de la democracia, porque es sobre todo en los gobiernos subcentrales donde se pueden tomar con probabilidades de éxito medidas dirigidas a incrementar la transparencia, la información y la participación, donde pueden desarrollarse las fórmulas de *e-government* y donde se puede ensayar un abanico muy amplio de innovaciones democráticas. No hace falta decir que, hoy por hoy, la opinión pública tiende a identificar –de manera injusta, pero real– los gobiernos regionales y locales como fuente permanente de corrupciones y prácticas antidemocráticas. En la regeneración democrática del territorio nos jugamos el futuro.

■ ALGUNAS ACTUACIONES PRIORITARIAS

Estos principios «rectores» son los que soportan o pueden soportar toda una serie de actuaciones territoriales, entre las cuales hemos juzgado como prioritarias las que referimos a continuación.

Infraestructuras

Que las regiones son un conjunto de ciudades estructuradas por la red de comunicaciones es una evidencia, como lo es que la eficiencia de un sistema urbano depende tanto del buen funcionamiento de los nódulos (las ciudades) como de la eficiencia de la red que los une. ¿Qué nos cabe mejorar en materia de infraestructuras? Pues, básicamente lograr un mayor nivel de equilibrio entre la red viaria y la ferroviaria. En cuanto a la primera, las inversiones llevadas a cabo en las últimas décadas hacen que la accesibilidad que proporciona la red viaria pueda considerarse elevada y que las actuaciones pendientes tengan que mirarse con cuidado, limitándose a eliminar obstáculos esporádicos y no a incrementar la capacidad de la red empezando actuaciones discutibles como por ejemplo el segundo *by-pass* de Valencia. Otra cosa muy diferente es el déficit de infraestructuras ferroviarias. La inversión ferroviaria en áreas densamente pobladas (metro o tranvía), la mejora de las cercanías de RENFE, el ferrocarril litoral, la finalización del AVE Alicante-Francia (eliminando el embudo de Castellón–Tarragona) y la construcción de la red ferroviaria para mercancías propuesta por FERRMED parecen prioridades razonables para las próximas décadas.

Los «outputs» no deseados

El territorio no es solo un apoyo pasivo de las actividades que se localizan en él. Ofrece (con el concurso de las

infraestructuras y las ciudades) economías de aglomeración, localización y red, pero también «devuelve» a la sociedad los costes derivados de su uso en forma de externalidades negativas y riesgos medioambientales que, si no son internalizados por particulares y empresas, tienen que ser soportados por la colectividad, es decir, por el sector público. En este capítulo de *outputs* no deseados podríamos incluir una serie de temas desgraciadamente muy conocidos: la lamentable situación de los residuos (tanto en la recogida como en el tratamiento y la eliminación), las inversiones pendientes en el ciclo del agua (especialmente los déficits que permanecen en el ámbito de la depuración de aguas y en el impulso de las desaladoras necesarias) y la degradación de espacios naturales –especialmente costeros– como consecuencia del exceso de presión urbanística. Habrá que tomar medidas (de dotación o mitigación) en estos tres ámbitos.

Los parques naturales y los espacios de la Red Natura

La desmesurada expansión de suelo artificializado en la última década ha sido en parte compensada por la multiplicación de parques naturales y de espacios naturales protegidos que pertenecen a la denominada Red Natura de la Unión Europea. Esta es, sin duda, una buena noticia que, aun así, requiere una matización necesaria: demasiado a menudo el esfuerzo público finaliza en la declaración formal de protección o, en el caso de los Parques Naturales, de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Falta,

por tanto, una actuación decidida para lograr una valoración pública de este patrimonio natural y un nivel de renta *per capita* digno para los habitantes de estos lugares. Ambos objetivos requieren un nivel de inversión pública que ha estado ausente, al menos en el porcentaje deseable.

Exprimir el territorio

Que, desde 1998 hemos sufrido, de nuevo, un proceso de sobrevaloración de activos inmobiliarios o, en términos más populares, de burbuja especulativa, es una evidencia que incluso los más reacios a aceptarla se han visto obligados a reconocer. Prescindiendo de la destrucción de un tejido económico muy vinculado a la construcción y del consiguiente incremento exponencial del paro, la herencia territorial que nos ha dejado el *boom* es difícil de menospreciar. Hemos artificializado en poco más de una década

**«NO HAY QUE OLVIDAR
NUNCA QUE EN UNA
POLÍTICA DE SALIDA DE LA
CRISIS ECONÓMICA QUE
SUFRIMOS, EL TERRITORIO
TAMBIÉN CUENTA, Y MUCHO,
PORQUE ESTÁ EN EL ORIGEN
DE NUMEROSAS ECONOMÍAS
DE LOCALIZACIÓN,
AGLOMERACIÓN Y RED»**



da más del 50% del suelo que se había dedicado a usos urbanos antes de 1987, con el factor agravante de una concentración extraordinaria de la ocupación de nuevos espacios en la franja costera (10 km de la costa). Hemos visto cómo el paisaje se degradaba y los recursos naturales se despilfarraban. Hemos asistido a la proliferación de asentamientos de baja densidad en régimen disperso, socialmente muy costosos. Hemos podido comprobar los nocivos efectos sobre la ética pública de esta verdadera quimera del oro y cómo la corrupción y la connivencia público-privada en los negocios urbanísticos disfrutaban del beneplácito de una población que, de alguna manera, participaba de forma extensa (o querría participar) en esta euforia. Hemos comprobado la importante transferencia de ganancias procedentes de sectores productivos con problemas a un sector inmobiliario donde las tasas de rentabilidad eran muy elevadas. Hemos podido identificar la presencia de una fuerte demanda de inversión foránea atraída por la miel de incrementos acumulativos

«LA INEVITABLE RECONVERSIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO Y LA TRANSICIÓN DEL MODELO TURÍSTICO HACIA OTRO MÁS RENTABLE, MENOS ESTACIONAL Y MÁS RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE SON TEMAS DONDE SE IMPONE LA COLABORACIÓN DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES»

anuales de precios de viviendas y solares superiores al 10% en términos reales. Y, al final, hemos experimentado en carne propia los efectos de la caída al precipicio (que no el aterrizaje suave que algunos preconizaban).

¿Hemos aprendido la lección? Se puede poner en duda cuando leemos en la prensa y en algún informe técnico que algunas grandes operaciones del pasado ya aprobadas (Rabassa, Cullera, Catarroja, Manises, El Puig...) no son revisadas y que continúan aprobándose otras nuevas (Marina d'Or como buque insignia pero bien acompañado) «para cuando vuelvan los buenos tiempos». El problema es que ni probablemente volverán los «buenos tiempos» (con un exceso de viviendas finalizadas no vendidas de cerca del millón en toda España y del correspondiente 15% en nuestro territorio) ni nos conviene que vuelvan, particularmente por los costes sociales y medioambientales que ha supuesto tener un País Valenciano «alicatado».



© Ana Ponce & Ivo Rovira

Un nuevo gobierno del territorio para después de la crisis tiene que conseguir la reconversión del sector inmobiliario e iniciar una transición del modelo turístico valenciano hacia otro modelo más rentable, menos estacional y más respetuoso con el medio ambiente. En la imagen, vista de la ciudad de Benidorm, paradigma del modelo turístico valenciano.

Haría falta que se planteara una revisión en profundidad del modelo territorial y de operaciones aprobadas y no ejecutadas, una supresión del crecimiento disperso de baja densidad, una difícil reconversión del llamado turismo residencial que ha condenado a la banalidad a buena parte del sector turístico valenciano y, antes que nada, una normativa sencilla y a la vez drástica que impidiera que los ayuntamientos continuaran calificando de manera suicida más terreno urbanizable. Ya tenemos bastante con «digerir» las existencias acumuladas.

El gobierno del territorio

Una nueva política territorial requiere también otra manera de gobernar el territorio. No hay duda de que este es un tema incómodo para la Generalitat, para las diputaciones, para los ayuntamientos y para los partidos políticos, tan pendientes del número de escaños y de los equilibrios del poder. La realidad, aun así, es muy tozuda y, al final, habrá que aceptar que sí que hay otra manera más lógica y eficiente de gobernar el territorio, diferente de la defensa encarnizada de las posiciones ganadas y la instauración de la falta de diálogo entre los niveles de administración como forma habitual del no-gobierno.

Parece que se impone una serena pero urgente reflexión sobre la importancia de la escala en el gobierno del territorio. Tal vez tendríamos que avanzar en la línea apuntada por la iniciativa de las veguerías en Cataluña y prestar mucha más atención a los fenómenos de colaboración supramunicipal desencadenados por la Ley de Chevènement en Francia. En cualquier caso, y de manera independiente de la reflexión antes reclamada, la cooperación interinstitucional entre administraciones con competencias en el mismo territorio tendría que dejar de lado de una vez por todas el campo de la retórica.

Un país de ciudades

Un objetivo irrenunciable es que los valencianos podamos disfrutar de unas ciudades más amables, habitables, creativas, cultas y democráticas. Afortunadamente, tenemos una red de ciudades densa y bastante bien estructurada con presencia significativa de ciudades medias. Aun así, esta es una condición necesaria pero no suficiente. Se tiene que favorecer la red de ciudades, el diálogo entre los alcaldes, el intercambio de buenas prácticas. También hay que aumentar radicalmente la calidad de la democracia local, dejar hablar a los ciudadanos y escucharlos, infor-

marles y hacerles partícipes de las decisiones. Todo ello es un problema de cultura. No de cultura política sino de cultura *tout court*. Si no se abren las ventanas y continúa reinando la opacidad, las administraciones y los políticos tendrán legitimidad democrática pero no disfrutarán del respeto de la ciudadanía ni de autoridad moral. Los conflictos son inevitables y fuente de progreso. Reflejan la diversidad de intereses e ideologías, y una sociedad sin conflictos solo puede ser una sociedad políticamente y socialmente reprimida. Si, como decía el viejo adagio medieval, «el aire de la ciudad nos hace libres», necesitamos más ciudad, más vecindad, más participación. Si la desafección ciudadana domina la vida local, el conjunto de la sociedad se resentirá y peligrarán libertades conquistadas y estados de bienestar alcanzados.

La crisis financiera

Las políticas de coste cero son prácticamente inexistentes. En este papel hemos propuesto un montón de acciones, algunas de las cuales, es cierto, tienen un cariz marcadamente cualitativo. Aun así, otras muchas requieren unos recursos financieros que, a estas alturas, parece inverosímil que podamos tener a nuestra disposición. Y la causa es una profunda crisis financiera que, si bien está estrechamente ligada a la crisis económica (caída de ingresos e incremento de los gastos de protección social con la aparición de elevados déficits), en nuestro país alcanza proporciones más preocupantes debido a los niveles logrados de deuda por habitante

tanto de la Generalitat como de muchos ayuntamientos (con notables efectos dominó entre administraciones). Por lo tanto, si hablamos de un territorio para después de la crisis, no podemos dejar de reclamar como condición previa un plan de saneamiento financiero radical. Sin esta pata, buena parte de las propuestas formuladas aquí no pasarán de ser declaraciones de buenas intenciones.

Por una nueva cultura del territorio

Nos hace falta un nuevo territorio para después de la crisis y no tendríamos que ser demasiado pesimistas. La famosa inscripción en la puerta del infierno en *La Divina Comedia* («*lasciare ogni speranza*») siempre tendrá seguidores entre los escépticos, pero no olvidemos que, al mismo tiempo que se perpetraban actuaciones rechazables en el territorio, algo iba cambiando también (tal vez como reacción) en el imaginario colectivo. El discurso de la «nueva cultura del territorio» ha calado

**«LA OPINIÓN PÚBLICA
TIENDE A IDENTIFICAR
A LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES
COMO FUENTE PERMANENTE
DE CORRUPCIONES
Y PRÁCTICAS
ANTIDEMOCRÁTICAS»**



TERRITORIOS CON CULTURA, TERRITORIOS CON PROPÓSITO COLECTIVO, TERRITORIOS CON FUTURO

Durante los últimos años muchos países de la Unión Europea han demostrado una clara intención de incorporar nuevas formas de gobierno del territorio y de gestión del paisaje. Desde diferentes ámbitos y desde distintas esferas de gobierno se constata una clara voluntad de transitar hacia nuevas formas de entender el territorio, de diseñar y evaluar políticas y de propiciar la participación ciudadana. Por esa razón se habla de la emergencia de una nueva cultura del territorio, de retorno al paisaje, del territorio como referente cultural e identitario, de territorios multifuncionales, de territorios inteligentes, de gestión sostenible, de consulta pública y de participación.

El caso de España ha sido diferente. Han sido catorce años en los que se ha creado mucho empleo, aunque con escaso valor añadido, y se han despertado muchas expectativas. Una década en la que la «ilusión monetaria» y la sensación de prosperidad impregnó amplios sectores sociales. Pero con efectos negativos, tal vez no deseados o no previstos, en materia territorial y ambiental. Sobre todo, se ha producido la más intensa degradación y banalización de referentes identitarios y paisajísticos de nuestra historia más reciente. La «UrBANALización» de nuestros territorios, como diría Francesc Muñoz, la creación de «territorios sin discurso», de territorios sin propósito colectivo de futuro sustentado en valores morales. Sería una forma de resumir procesos presididos por la generalización de modelos de dispersión residencial que bien pudieran definirse como «no lugares» donde casi todo es urbano pero casi nada es ciudad. Las consecuencias sociales, culturales y políticas no han sido menores. Se han consolidado una difusa opacidad y una permisiva complicidad entre amplios sectores sociales partícipes del juego «todos ganamos».

Pasado un tiempo, la sociedad española, en general, y la valenciana, en particular, percibirán con mayor claridad las consecuencias presentes y futuras de una década y media de desmesura, de excesos y desgobierno territorial. Consecuencias económicas, sociales, ambientales y políticas. Desde las relacionadas con la excesiva dependencia de la actividad económica y el empleo en el sector de la construcción residencial, ahora evidentes, hasta la desaparición irreversible de referentes de nuestra historia y cultura colectivas, pasando por el desarrollo de episodios de «captura» de las administraciones públicas, en especial en la escala local y re-



© Miguel Lorenzo

Una de las consecuencias del crecimiento vivido en España en la última década ha sido la degradación del territorio. A lo largo de estos años se han generalizado modelos de dispersión residencial donde todo es urbano pero nada es ciudad.



«HAN SIDO CATORCE AÑOS EN LOS QUE SE HA CREADO MUCHO EMPLEO Y SE HAN DESPERTADO MUCHAS EXPECTATIVAS. PERO CON EFECTOS NEGATIVOS, TAL VEZ NO DESEADOS O NO PREVISTOS, EN MATERIA TERRITORIAL Y AMBIENTAL»

gional y de corrupción de la política y de las políticas. Un dilatado proceso que ha propiciado la «corrupción del urbanismo», en acertada afirmación de F. Gaja, y un no menos inquietante incremento de casos de corrupción política y administrativa donde la ética pública ha salido muy dañada y la reputación de España y del País Valenciano muy afectadas

El País Valenciano debería incorporarse al grupo de países que han decidido hacer suya una «nueva cultura» del territorio. No sólo porque otorguemos al territorio unos valores identitarios y culturales, sino porque la calidad territorial será uno de nuestros mejores activos en un contexto en el que ya no podremos competir con Alemania y tampoco podemos hacerlo con las economías emergentes. Quiero pensar que algo está empezando a cambiar en nuestro imaginario colectivo. Incluso antes de que el ciclo económico anunciara una paralización de la construcción residencial, ya existían voces que expresaban su desconcierto y su descontento con las formas y con el fondo de un proceso desbocado que no anunciaba un buen final. Y es a partir de estas expresiones desde donde pueden construirse discursos consistentes que pongan más el acento en el desarrollo y la cohesión territorial que en el crecimiento, que antepongan la cultura, la historia y criterios sostenibles a cualquier otra opción o práctica que persiga la rentabilidad electoral a corto plazo o el beneficio inmediato. Discursos positivos, propositivos y participados por una ciudadanía que ha de estar implicada y comprender que cuando un territorio o un paisaje irreplicable se pierde, desaparece una parte de su historia y de su cultura, pero también oportunidades de futuro. Hemos de persistir para que esta forma de pensar sea compartida por una amplia mayoría social.

Nuestra mayor debilidad reside en la incapacidad para identificar, consensuar e impulsar de forma coordinada una agenda real con los mayores desafíos colectivos para desarrollar un conjunto de políticas públicas a favor de una mayor cohesión y coherencia territorial. Nuestro mayor problema ya no es de información. Sobran diagnósticos elaborados a escala local, regional, estatal y europea. Sobran planes y proyectos. Sobra retórica. Pero falta cultura y voluntad política para adentrarnos en el camino de la buena gobernanza democrática y del buen gobierno del territorio.

Nuestro principal problema sigue siendo cultural y político, que desborda ampliamente expresiones políticas y límites administrativos. Y no se perciben signos esperanzadores de cambio en un futuro inmediato. Esta es una responsabilidad política compartida que hunde sus raíces en contextos culturales y que alcanza





al conjunto de la sociedad. Por tanto, todos somos responsables y cada uno desde su ámbito de responsabilidad y en la medida de sus posibilidades debiera contribuir al cambio. Desde los distintos poderes del Estado, hasta el último responsable de cualquier gobierno local, pasando por el trabajo de profesionales, de académicos, de ciudadanos activamente comprometidos que forman parte de plataformas o movimientos o de personas solidarias con las generaciones que aún no han nacido, todos y todas hemos de ser capaces de anteponer la defensa del interés general y una forma más respetuosa de relacionarnos con el medio por encima de cualquier otra consideración. Sabiendo que, como decía el maestro Vidal de La Blache «ningún territorio civilizado ha sido el artesano exclusivo de su propia civilización», pero sabiendo también que una sola generación puede ocasionar daños irreparables a un territorio.

Es mediante el trabajo que haga posible que los contextos culturales cambien desde donde que será posible conseguir cambiar la percepción social mayoritaria en relación con la utilización de sus recursos o de su paisaje como cultura, bien público y legado. Y será entonces cuando las medidas políticas, más coordinadas, con mayor voluntad de cooperación y más claras, ganarán en eficacia.

Las cosas se pueden hacer de otra manera. Incluso se pueden hacer razonablemente bien. Solo se requiere voluntad política para promover un desarrollo territorial más sostenible. Las estrategias territoriales han de servir para inspirar y orientar realmente la política. El territorio es mucho más que un recurso o un soporte físico para asentar actividades. El territorio es cultura, es referente identitario, es patrimonio, es bien público, es espacio de solidaridad y es legado.

Y no tenemos derecho a sobreexplotarlo, a esquilmarlo o a devastarlo, porque comprometemos el bienestar colectivo e hipotecamos el futuro. Las actuales dinámicas territoriales comprometen el bienestar colectivo y condicionan el de futuras generaciones. Por eso el gobierno del territorio tiene que situarse en el centro del debate como objetivo político estratégico. Entendiendo por político, ciudadano. Es decir, una cuestión que compete a todos y no solamente a políticos o a expertos. Hay que exigir más información, mayor participación en la toma de decisiones y más respeto colectivo y generacio-



© Miguel Lorenzo

La excesiva dependencia de la construcción no solo ha tenido consecuencias económicas, sino también sociales y ambientales al perderse una parte irrecuperable de nuestra historia y cultura colectiva.

nal. Más democracia en definitiva. De ahí que el debate ciudadano en torno a estas cuestiones sea tan necesario como inaplazable.

Mientras tanto, mientras en la escala regional no se disponga de un modelo territorial consensuado, como ya ocurre en decenas de regiones europeas que hace tiempo apostaron por la gestión prudente e inteligente de sus recursos, mientras no se disponga de planes territoriales a escala subregional del estilo de los que aconsejan hace tiempo las autoridades europeas y el sentido común, mientras no se resuelva de otra manera la financiación de los ayuntamientos (y probablemente de los partidos), hay que hacer posible que avance el debate ciudadano, haciendo de ésta una cuestión política y exigiendo en cada nivel, en especial en la escala local, más prudencia, más responsabilidad, otras prácticas

y otra forma de gobernar cuando del territorio se trata. Hasta que seamos capaces de situar este problema como un problema de la mayoría. Hasta que seamos capaces de consolidar otra cultura del territorio.

Por eso es muy importante insistir en la necesidad de alentar un debate público sobre nuestro modelo territorial. Sobre qué queremos vender, además de territorio, en el futuro inmediato. Sobre cómo queremos ser dentro de veinte años y qué tenemos que hacer para conseguirlo.

Joan Romero. Catedrático de Geografía, Universitat de València.

«CUANDO UN TERRITORIO IRREPETIBLE SE PIERDE, DESAPARECE UNA PARTE DE SU HISTORIA Y DE SU CULTURA, PERO TAMBIÉN OPORTUNIDADES DE FUTURO. HEMOS DE PERSISTIR PARA QUE ESTA FORMA DE PENSAR SEA COMPARTIDA POR UNA AMPLIA MAYORÍA SOCIAL»



Ante la especulación u otras prácticas insostenibles en urbanismo, ha surgido un movimiento ciudadano que ha ido extendiendo un nuevo paradigma de la sostenibilidad. En la imagen, vecinos y miembros de la plataforma Salvem el Cabanyal protestan por los derribos en el barrio valenciano del Cabañal en abril de 2010.

con fuerza en los ámbitos académicos y profesionales. Al *Manifiesto por una nueva cultura del territorio* de 2006, le han sucedido otros, como el *Manifiesto fundacional por una nueva cultura del agua* y otros manifiestos y declaraciones para la mejor protección del paisaje. Contra la especulación urbanística, las prácticas insostenibles en materia de urbanismo y la generalización de la corrupción urbanística, el movimiento ciudadano ha logrado un extraordinario crecimiento tanto en España como en el País Valenciano. Los «salvem», las plataformas de «defensa» o «custodia» han hecho oír su voz y los medios de comunicación se han hecho eco de ello. El nuevo paradigma de la sostenibilidad se ha extendido como una mancha de aceite y los poderes públicos (no todos ni en todos los lugares) han iniciado otro discurso más acorde con los intereses de los ciudadanos.

Ahora bien, no podemos estar seguros de haber aprendido de los errores. Porque, quizás, no nos ha servido la experiencia de anteriores burbujas especulativas. No es seguro que la cultura de exprimir el territorio haya desaparecido. Pensemos que durante los años de expansión, el territorio era la «quimera del oro». Ahora, en la recesión, sin embargo, puede pasar que la necesidad de luchar contra el paro puede volverse también en contra del territorio y esto servir de excusa para volver a viejas prácticas, en lugar de favorecer la definición de un modelo alternativo.

Los pueblos más cultos de Europa han sido capaces de lograr un equilibrio respetuoso entre cultura, historia, tradición, modernidad y competitividad. Nosotros los valencianos podemos hacer lo mismo. No es seguro que hayamos aprendido de los errores y de los excesos, insistimos, pero esta vez, como dice el personaje de Lewis Carroll en el pasaje de *Alicia en el País de las Maravillas* titulado «Una merienda de locos», tendríamos que ser capaces de «hacer las cosas mucho mejor». ☺

BIBLIOGRAFÍA

- AZAGRA, J. y J. ROMERO, 2008. *País complex*. Publicacions de la Universitat de València. Valencia.
- ROMERO, J., 2009. *Geopolítica y gobierno del territorio en España*. Tirant Lo Blanch. Valencia.
- SORRIBES, J., 1999. «Las áreas metropolitanas: análisis teórico y experiencia comparada». *Àrea Metropolitana. Revista Informativa del Consell Metropolità de l'Horta*, 5.
- SORRIBES, J., 2002. *Un país de ciutats o les ciutats d'un país*. Publicacions de la Universitat de València. Valencia.
- SORRIBES, J., 2007. *Rita Barberá: el pensamiento vacío*. Faximil Edicions Digitals. Valencia.
- SORRIBES, J. et al., 2009. «La gestión del crecimiento urbano: un método de evaluación». *XXXV Reunión de Estudios Regionales. Valencia 26 y 27 de noviembre*. Disponible en: <<http://www.reuniondeestudiosregionales.org/valencia2009/htdocs/comunicaciones.php>>.
- SORRIBES, J., 2010. *València: una ciutat manifestament millorable*. Faximil Edicions Digitals. Valencia.

Joan Romero. Catedrático de Geografía, Universitat de València.

Josep Sorribes. Profesor titular de Economía Aplicada, Universitat de València.

